Imprimir

Con el estallido social y la represiva respuesta del Estado, el carácter contestario y democrático de las redes sociales y la consolidación del Pacto Histórico como proyecto político, la opinión pública en Colombia sufrió cambios sustanciales en las maneras de discutir y entender asuntos públicos.
De manera concomitante, el desprestigio de los medios masivos tradicionales creció exponencialmente, hasta el punto de que la hegemonía informativa de los canales privados RCN y Caracol, y la evidente manipulación de las audiencias, poco a poco se fueron erosionando. La emergencia de medios alternativos, el cansancio de jóvenes estudiantes y de sectores de clase media de la corrupción público-privada y las múltiples expresiones de violencia del régimen uribista, se sumaron al desprestigio del uribismo y de todos sus órganos propagandísticos.

Desde antes que entraran en operación los canales de televisión privados en 1998, el ejercicio periodístico en Colombia gozaba, en términos generales, de buen recibo por parte de una opinión pública que creía en la independencia y la objetividad de los periodistas.

Al cerrar filas alrededor del proyecto neoliberal y violento en las maneras de resolver las diferencias y los conflictos que impulsó Álvaro Uribe Vélez, empresas mediáticas como RCN y Caracol, revistas radiales como La FM, La W y Blu Radio y medios impresos como El Tiempo, El País y El Colombiano, entre otros, se convirtieron en “aparatos ideológicos de Estado”, lo que en buena medida coadyuvó a la consolidación de lo que en su momento se llamó el unanimismo ideológico, derivación clara del Pensamiento Único.

Aunque lento, los cambios en las maneras como la opinión pública fue entendiendo los problemas del país y sobre todo, asumiendo críticamente los efectos sistémicos dejados por el régimen uribista, permitieron que emergieran discursos contra hegemónicos, los mismos que erosionaron ese unanimismo ideológico y mediático, hasta debilitar a medios como RCN, hasta el punto de poner en riesgo su permanencia al aire, por el bajo consumo no solo de su noticiero, sino de la oferta cultural de su parrilla televisiva.

Hoy existe en Colombia una opinión pública más crítica, gracias en buena medida al papel que jugaron profesores y profesoras críticos del régimen violento y del ethos mafioso que Uribe Vélez impuso durante sus pérfidos 8 años de gobierno. En ese cambio, por supuesto, las redes sociales aportaron a esa toma de conciencia ciudadana. Todo lo anterior terminó de potenciarse con la llegada de la pandemia por el covid19 y el desastroso manejo del gobierno del títere de Uribe, Iván Duque Márquez. El estallido social en las principales ciudades del país y en particular en Cali, se explica no solo por el hambre y el desempleo, sino por el proceso comprensivo que las audiencias adelantaron, de las maneras como el Estado venía operando para solo satisfacer a una élite retardataria, premoderna, feudal y precapitalista.

Con la consolidación del Pacto Histórico (PH) como proyecto político, aquellas debilitadas empresas mediáticas, intentan recuperar el lugar dominante que tuvieron antes de 1998 y entre el 2002 y el 2010. Ante el miedo de perder los privilegios ganados por defender el régimen mafioso y la operación de un Estado capturado e interesadamente débil, las mismas empresas periodísticas arriba señaladas, han emprendido una furiosa arremetida contra las dos figuras políticas del PH, Francia Márquez Mina y Gustavo Petro Urrego.

Con muestras claras de racismo y animadversión hacia la figura de la lideresa ambiental y el exalcalde de Bogotá, las señaladas empresas mediáticas actúan hoy más como aparatos ideológicos de Estado, en el sentido planteado por Louis Althusser, que como medios interesados en generar una opinión pública crítica y capaz de discutir asuntos públicos en un ambiente democrático y a partir del intercambio de argumentos. Por el contrario, con el fenómeno de las bodegas y las cuentas pro establecimiento en redes como Twitter, estos medios masivos pasaron de informar, a hacer propaganda política.

En el actual escenario electoral, en el que es probable el triunfo del proyecto contra régimen que representa Petro Urrego, los ya referidos medios abandonaron el ejercicio riguroso y responsable del periodismo, para adentrarse en la defensa política del régimen que hace posible su operación.

Así, por estos días en Colombia, el noble y bello oficio del periodismo, deviene en una

profunda crisis de credibilidad y legitimidad, lo que convierte a muchos de los periodistas, con notables y pocas excepciones, en estafetas y amanuenses del régimen criminal y mafioso que opera en Colombia en nombre del Estado. Con un periodismo así, pierde la democracia y triunfa el autoritarismo.

Adenda: convendría que el candidato presidencial, Gustavo Petro, morigera sus reacciones ante las provocaciones de agentes propagandísticos y bodegueros de las redes sociales. El asunto no está en si tiene razón en calificar como neonazi a un “periodista” y a un medio. Por el contrario, el problema está en que como figura política y primer opcionado a llegar a la Casa de Nariño, debe garantizar la operación de ese tipo de empresas mediáticas y con estas, las libertades de prensa y expresión.

Germán Ayala Osorio

Foto tomada de: Semana.com